



**Asamblea General  
Consejo de Seguridad**

Distr.  
GENERAL

A/49/281  
S/1994/886  
28 de julio de 1994

ORIGINAL: ESPAÑOL

ASAMBLEA GENERAL

Cuadragésimo octavo período de sesiones

Tema 42 del programa provisional\*

LA SITUACIÓN EN CENTROAMÉRICA: PROCEDIMIENTOS  
PARA ESTABLECER LA PAZ FIRME Y DURADERA, Y  
PROGRESOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE UNA REGIÓN  
DE PAZ, LIBERTAD, DEMOCRACIA Y DESARROLLO

CONSEJO DE SEGURIDAD

Cuadragésimo noveno año

Nota del Secretario General

En el documento adjunto figura el informe del Director de la División de Derechos Humanos de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL), que abarca el período comprendido entre el 1º de marzo y el 30 de junio de 1994. Como se recordara (véase S/23999, párr. 3), se decidió que la labor de la ONUSAL en relación con el Acuerdo sobre Derechos Humanos de San José (A/44/971-S/21541, anexo) continuara siendo tema de una serie de informes por separado.

---

\* A/49/150.

ANEXO

Undécimo informe del Director de la División de Derechos Humanos de  
la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador  
(1º de marzo a 30 de junio de 1994)

I. INTRODUCCIÓN

1. Los Acuerdos de Paz suscritos entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) facultaron a la División de Derechos Humanos para realizar la verificación activa de la situación de los derechos humanos y le otorgaron la responsabilidad de colaborar con las instancias nacionales en orden a coadyuvar al perfeccionamiento de los medios de protección a los derechos humanos y el respeto a las reglas del debido proceso legal.

2. En ese contexto, la División de Derechos Humanos ha venido informando periódicamente al Secretario General, y por su conducto al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General, acerca de la evolución de los derechos humanos en El Salvador. Asimismo, los informes han incluido un análisis del estado de cumplimiento de los otros compromisos establecidos por los distintos acuerdos, particularmente aquellos relativos a la creación, reforma o consolidación de las instituciones responsables de la protección y control de la legalidad de los derechos humanos. Estos, en la medida en que se aproxima el retiro de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL), constituyen compromisos de urgente cumplimiento.

3. Con fundamento en esa percepción, en el presente informe, que comprende los meses de marzo, abril, mayo, y junio de 1994, se incluye nuevamente un análisis del funcionamiento de algunas instituciones que forman parte del sistema de administración de justicia en El Salvador, materia sobre la cual la División de Derechos Humanos ha ido progresivamente acentuando su verificación activa, así como del proceso de reformas legislativas derivadas de las obligaciones contenidas en los Acuerdos de Paz.

II. ANÁLISIS DE COYUNTURA: PERÍODO COMPRENDIDO  
ENTRE MARZO Y JUNIO DE 1994

A. Apreciación general de la situación

4. En el décimo informe al Secretario General (A/49/116-S/1994/385) señalé que la evolución de los derechos humanos durante los meses de noviembre de 1993 a febrero de 1994 mostró una cierta mejoría de la situación frente a los graves hechos que se alertaron en el noveno informe, con lo cual parecían retomarse las tendencias globales del proceso. En el período comprendido por este informe estas tendencias se han mantenido.

5. La primera y segunda ronda electorales, realizadas durante el período que comprende el presente informe, fueron precedidas en 1993 de un contexto de creciente violencia política, tendencia que, se pensó, podría afectar el proceso

/...

electoral. Sin embargo, el desarrollo del final de la campaña electoral no se vio perturbado por hechos violentos, salvo en algunos casos aislados.

6. No obstante, el incremento de la violencia común durante los últimos meses ha alcanzado proporciones muy preocupantes; los altos índices de delincuencia, y en especial la presencia comprobada de complejas estructuras de crimen organizado, sumados a la impunidad derivada del deficiente funcionamiento del sistema de administración de justicia, constituyen en la actualidad los mayores obstáculos para la realización efectiva de los derechos humanos en El Salvador.

7. Al respecto debo expresar mi singular preocupación por la existencia de indicios acerca de la participación de miembros de alta de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional en acciones delictivas. Esta situación, además de la gravedad que de suyo conlleva para la vigencia del estado de derecho, puede fácilmente ocultar o derivar en estructuras que ejercen violencia política tras la apariencia de la comisión de delitos comunes. En el mismo sentido se debe reiterar nuestra preocupación por la presencia creciente de bandas armadas que vienen protagonizando diversas acciones criminales en varias zonas rurales del país. En diversas oportunidades he señalado que la existencia de este tipo de grupos ilegales representa un peligro latente para el goce de los derechos humanos.

8. Frente a esta difícil situación de inseguridad ciudadana el Gobierno ha venido emprendiendo medidas oportunas. El Presidente de la República, Sr. Armando Calderón Sol, no sólo ha reconocido ante el país la existencia del crimen organizado y se ha comprometido a su persecución, sino que además ha venido trazando la política de seguridad pública en la lógica de los Acuerdos de Paz; es decir, mediante su apoyo decidido a la Policía Nacional Civil (PNC) como único órgano encargado legalmente de velar por la tranquilidad ciudadana y el orden público interno.

9. Una sana expresión de esta voluntad política es el reciente despliegue de la PNC en los departamentos de La Paz, Cuscatlán, Santa Ana, el norte de San Salvador, Ahuachapán y Sonsonate. La PNC ahora tiene efectivos en todos los departamentos del país, aunque en algunos departamentos, su presencia se circunscribe aun a las cabeceras departamentales o principales ciudades, mientras que la Policía Nacional continúa sus actividades en las demás zonas. Durante el período que cubre este informe fueron nombrados como Viceministro de Seguridad Pública el Sr. Víctor Hugo Barrera y como Director de la Policía Nacional Civil el Sr. Rodrigo Ávila, quienes han reiterado su compromiso en elaborar un proceso de ajustes en la institución, en orden a dotar de la mayor eficiencia a ese cuerpo policial.

10. Estas respuestas positivas del Gobierno se concretaron también en la disposición del Presidente de adelantar la desmovilización de la Policía Nacional para el mes de diciembre próximo, precipitada por el involucramiento de un oficial de alta en un asalto bancario, hecho que puso en evidencia la participación de agentes de ese cuerpo policial en el crimen organizado. Asimismo, el Presidente dispuso la disolución de la Sección de Investigación Criminal de la Policía Nacional.

11. La cantidad de denuncias recibidas por la División de Derechos Humanos durante los cuatro meses que cubre este informe disminuyó en comparación a los cuatro anteriores (de 437 a 333). Dentro del período analizado, se ha experimentado un descenso mensual en que el número de denuncias pasó de 100 en marzo a 90 en abril, 82 en mayo y 61 en junio. Es preciso destacar, sin embargo, que la cantidad de denuncias recibidas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos empieza a aumentar, lo que constituye una transferencia natural y deseable de las labores de verificación.

12. No basta, además, que durante un período determinado las cifras de denuncias recibidas sean inferiores. Este hecho resulta alentador, pero la situación será siempre precaria si las instituciones del Estado no cuentan con la profesionalización y grado de eficacia adecuados para prevenir y sancionar las violaciones a los derechos humanos.

13. Un importante número de las denuncias recibidas por la ONUSAL presentan indicios o elementos de juicio que no permiten descartar la motivación política. El nuevo atentado de que fue objeto la ex comandante del FMLN y actual diputada a la Asamblea Legislativa, María Marta Valladares (Nidia Díaz), así como los asesinatos de Jorge Bill Martínez Zaldaña, José Isaías Calzada Mejías y Heriberto Galicia Sánchez, todos militantes de la oposición, son hechos que generan inquietud, pues parecen indicar que en El Salvador aún existen grupos que recurren a la violencia como medio para resolver conflictos políticos. El alto número de amenazas contra personas con actividad política va en el mismo sentido.

14. Por otra parte, la Asamblea Legislativa aprobó en una primera vuelta varias reformas constitucionales en las que se recogen algunas de las recomendaciones formuladas por la División de Derechos Humanos y la Comisión de la Verdad. Otras recomendaciones, sin embargo, no fueron atendidas.

## B. Examen de la verificación activa de la situación de los derechos humanos

### 1. Derecho a la vida

15. Las denuncias admitidas durante el período en relación con violaciones al derecho a la vida presentan una disminución en comparación a los períodos anteriores. La cifra global para el período suma 96 denuncias (comparados a 144 en el cuatrimestre anterior), entre ejecuciones arbitrarias (28), tentativas de ejecución arbitraria (9) y amenazas de muerte (59).

16. Es importante también destacar que los últimos meses estuvieron caracterizados por el contexto electoral que pudo haber influido en un incremento de las violaciones (o aún de denuncias) políticamente motivadas. Ello no ocurrió. La presencia del Grupo Conjunto para la Investigación de Grupos Armados Ilegales con Motivación Política puede haber jugado como un factor disuasivo.

17. En relación con las amenazas de muerte, si bien en pocos casos han llegado a traducirse en atentados materiales en contra de la vida, sea porque la

/...

motivación del autor se limitaba a la intimidación o porque la víctima accedió a las exigencias de los hechores, constituyen hechos que demuestran claramente que el recurso a la violencia con fines políticos es todavía una realidad presente en El Salvador y por tanto afecta sensiblemente el proceso de consolidación del sistema político democrático concertado en los Acuerdos de Paz.

a) Ejecuciones arbitrarias o extralegales

18. Durante los cuatro meses que cubre el presente informe se han recibido 28 denuncias de ejecuciones arbitrarias.

19. Jorge Bill Martínez Zaldaña, ex combatiente y militante del ERP-FMLN, fue asesinado el 9 de marzo en San Salvador por un desconocido que le disparó a quemarropa en el rostro. La investigación efectuada por la División de Derechos Humanos revela que no se trató de un robo y que no puede descartarse que se trate de un homicidio políticamente motivado.

20. El día de la segunda vuelta electoral, en Jicalapa, fue asesinado José Isaías Calzada Mejías, miembro activo del ERP-FMLN, quien se había desempeñado como presidente de una junta receptora de votos. Los principales sospechosos de la autoría son conocidos militantes de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). No es posible descartar la motivación política del crimen.

21. Adolfo Antonio García Hernández, alias "el Choco", ex combatiente del FMLN y jefe de la banda de los "Recontras", fue asesinado el 6 de marzo en la carretera que va de Aguilares a Suchitoto. Los supuestos autores podrían ser personas que toman la justicia en sus manos bajo el nombre de "Los Ángeles Negros" o ser resultado de un ajuste de cuentas al interior de la banda armada.

22. Heriberto Galicia Sánchez, candidato a diputado suplente en San Miguel por el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y dirigente del sindicato de trabajadores de INAZUCAR, fue asesinado en San Miguel el 27 de marzo, con un disparo en la cabeza. La investigación sugiere que se trata de una acción con motivación política.

23. La noche del 26 de marzo, en el municipio de Guatajiagua, departamento de Morazán, cuatro sujetos con trajes militares y armados con fusiles M-16 dieron muerte a Santos Fidilecto Vásquez, a su hija Flor de María Vásquez Reyes y Santos Miguel Díaz, ayudante de labores. Se ha descartado el móvil del robo.

24. El 15 de mayo, en el municipio de San Sebastián Salitrillo, un agente de la Policía Nacional disparó, sin razón alguna, sobre un vehículo en que viajaban tres jóvenes, provocando la muerte de uno de ellos y una lesión severa en la columna vertebral de otro.

25. El riesgo que existe cuando se encomienda a la fuerza armada tareas de seguridad pública está ejemplificado en el caso de la muerte de Jesús Molina Ramírez, ocurrida el 30 de marzo por acción de efectivos de una patrulla militar. La víctima robó una bicicleta y emprendió la huida, mientras que su propietario denunció el robo a una patrulla del Destacamento Militar No. 4. Los efectivos militares le dieron alcance ordenándole detenerse; como no acató la orden y aceleró su marcha, un soldado le disparó en tres oportunidades

/...

provocando su muerte. La ejecución arbitraria fue agravada por el encubrimiento institucional del hecho y la coacción ejercida sobre un testigo para que distorsione sus declaraciones en favor de los soldados.

b) Tentativas de ejecución arbitraria

26. El caso de mayor relevancia ha sido la segunda tentativa de ejecución arbitraria en contra de María Marta Valladares, ex-comandante Nidia Díaz del PRTC-FMLN y actual diputada en la Asamblea Legislativa, ocurrida el 19 de mayo. Desconocidos que se hallaban dentro de un automóvil con vidrios polarizados atacaron con armas de fuego, en la puerta del domicilio de la diputada, el vehículo que usa para transportarse, hiriendo levemente a su conductor y guardaespaldas Santiago Cruz Elías Pineda, quien era su único ocupante en ese momento. En el pasado mes de febrero Cruz Elías resultó herido en un atentado en el mismo lugar y con idénticas características.

27. Las características y modalidad del ataque tienden a indicar que se trata de un acto con motivación política aunque subsisten interrogantes en torno al por qué se atentó contra el vehículo de Marta Valladares por segunda vez, si los agresores podrían saber que esta persona no estaba en su interior. Pese a la importancia del caso, las investigaciones policiales y judiciales han realizado avances mínimos sobre el esclarecimiento de ambos atentados. La gravedad de este hecho radica en que existen pistas importantes que la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil no sigue, según parece, en forma deliberada.

28. El hermano del Presidente de la Junta Electoral Municipal del departamento de la Libertad y conocido militante del FMLN, Mario Armando Molina Molina, fue víctima de un intento de homicidio cuyo presunto autor es detective de la Policía Nacional. Las investigaciones no descartan el móvil político.

c) Amenazas de muerte

29. Durante el período se recibieron 59 casos de denuncias por amenazas de muerte, cifra que continúa siendo muy elevada.

30. El 16 de abril, cuando el motorista del candidato presidencial Rubén Zamora, Luis Antonio Recinos, se disponía a recogerlo de su domicilio, llegaron dos hombres armados con fusiles M-16 que obligaron al motorista a descender del vehículo para luego huir con éste. Los sujetos apuntaron sus armas hacia Recinos, diciendo "estos los ocupamos mejor nosotros que los Comandos Urbanos". La víctima está convencida que los agresores eran militares, por su forma de maniobrar. Las investigaciones de la ONUSAL califican el hecho como un acto de amedrentamiento dentro del contexto de la segunda vuelta electoral.

31. Otras personas amenazadas durante el período incluyen:

a) El profesor de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Xavier Obach, su esposa Monserrat Elwes, y los sacerdotes jesuitas de la UCA (amenazas telefónicas). El hecho tiene las características de un acto de amedrentamiento;

b) El párroco de la ciudad de Berlín, Protasio Villatoro, quien ha participado muy activamente en organizaciones comunitarias (amenazas telefónicas);

c) El sacerdote Orellana Castillo, párroco al municipio de Masahuat, departamento de Santa Ana, fue amenazado durante su homilía por un individuo vinculado al ex alcalde de ARENA quien señala al sacerdote como responsable de la derrota electoral.

32. El 6 de junio, una agencia de prensa recibió en una llamada telefónica a un periodista amenazas del autodenominado "Comando Domingo Monterrosa" contra distintas personalidades incluidas el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, al Fiscal General de la República, al presidente del Consejo de la Judicatura, al licenciado Luis Gómez Zárate, quien fuera miembro del Consejo Central de Elecciones, Juan Gerónimo Castillo, miembro del Grupo Conjunto y a sacerdotes jesuitas.

## 2. Derecho a la integridad personal

### a) Torturas

33. Durante el período se recibieron tres denuncias de tortura. En dos casos, existen evidencias de su efectiva realización.

34. El 10 de mayo, en San Miguel, efectivos de la Policía Nacional Civil detuvieron a Avilio Ricardo Martínez acusado de robo, quien habría sido víctima de torturas físicas para confesar el delito. La verificación preliminar tiende a establecer que la víctima fue torturada pero la investigación se vio seriamente obstaculizada por el extemporáneo reconocimiento médico de la víctima.

35. José Manuel Mejía Silva fue víctima de diversas formas de tortura física por agentes de la Policía Nacional en El Cocal, La Libertad, después de su captura el 8 de junio.

### b) Malos tratos

36. En este período se registraron 33 denuncias por malos tratos, cifra que en términos globales es inferior a la del período anterior. No obstante, la tendencia decreciente registrada en los dos anteriores informes podría estar revirtiendo si se toma en cuenta el incremento mensual experimentado, en que el número de denuncias pasó de 4 en marzo, a 6 en abril, elevándose hasta 15 en el mes de mayo para descender a 8 en junio.

## 3. Derecho a la seguridad personal

### a) Desapariciones forzadas o involuntarias

37. De acuerdo a la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General, la

desaparición forzada consiste en un acto por medio del cual se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así de la protección de la ley (resolución 47/133 del 18 de diciembre de 1992).

38. Durante el período el Comité de Familiares de Víctimas de las Violaciones a los Derechos Humanos de El Salvador (CODEFAM) denunció las desapariciones forzadas de Luis Jaime Flores Parada y Luis Alberto Landaverde Portal. En el desarrollo de la verificación no han concurrido los elementos necesarios para establecer la existencia de tales desapariciones, en los términos en que son entendidas por las Naciones Unidas. En especial, en ninguno de los dos casos existen elementos que permitan llegar a la presunción de alguna intervención, directa o indirecta, de agentes del Estado. Por otro lado, existen algunos indicios que apoyan la hipótesis que se trata de casos de delincuencia común.

b) Secuestros

39. Se han recibido 15 denuncias de secuestro entre marzo y junio de 1994. Este hecho parece tener relación con el incremento de las actividades de las bandas armadas, aunque la cifra no es representativa de la situación, ya que la mayor parte de las víctimas y sus familiares no denuncian los hechos ante las autoridades e incluso ante la ONUSAL, por temor a las represalias de estas bandas.

4. Derecho a la libertad personal

40. Durante el presente período se recibieron 39 denuncias de detenciones arbitrarias. Se ha podido establecer, sin embargo, que muchas de las detenciones por faltas de policía no llegan a ser denunciadas por las víctimas. Existe por tanto un universo de casos que no llega a ser registrado. En reiteradas oportunidades he señalado que para la erradicación definitiva de esta práctica es necesaria la derogación de la antigua ley de policía y el traspaso de la competencia de estos casos a los jueces de paz. Una verificación en las bartolinas de la ciudades de la región Paracentral constató que en muchas de las detenciones por faltas ocurridas los fines de semana, los detenidos permanecen 48 o 72 horas, a pesar de que en estas localidades hay turnos rotativos de jueces.

5. Derecho al debido proceso legal

41. Las violaciones al debido proceso legal, incluyendo el deber jurídico del Estado de investigar y sancionar, continúan siendo objeto de un gran número de denuncias. La incapacidad del sistema judicial para determinar la responsabilidad de graves violaciones a los derechos humanos ha sido comprobada con inquietud por la ONUSAL de manera reiterada y recurrente.



42. A este hecho se viene a sumar el conocimiento de un inquietante número de casos de denegación de justicia que parecen tener motivaciones en la calidad política de las víctimas. Otro problema recurrente es el de la corrupción de los funcionarios del órgano judicial. A título de ejemplo, una investigación realizada con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en el Juzgado Primero de Paz de Santa Rosa de Lima, La Unión, constató que varios detenidos por ebriedad escandalosa y juegos de azar debieron pagar 400 a 500 colones por su libertad. En otros casos, el juez ha negociado con familias de los detenidos el pago de sumas que oscilan entre los 2.000 y 3.000 colones.

#### 6. Libertad de reunión

43. El 18 de junio entró en vigor una ordenanza municipal en San Salvador por medio de la cual se regula el ejercicio y las limitaciones de la libertad de reunión y manifestación pública en el municipio de San Salvador y se establecen sanciones a los transgresores. Entre otros aspectos, prohíbe celebrar manifestaciones públicas durante los días laborales. Sindicatos que desobedecieron esta disposición han recibido multas.

44. Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen el derecho de reunión pacífica pero admiten restricciones "previstas por la ley" que sean "necesarias" en interés de la seguridad pública o del orden público. Es perfectamente normal entonces regular la conducta de manifestaciones públicas pero la restricción tiene que limitarse a lo imprescindible para que la excepción no devore la regla que es el goce del derecho. En este sentido, habría que ver si medidas de menos envergadura pudieran salvaguardar los intereses del orden público.

#### 7. La situación de violencia y los derechos humanos.

45. En el noveno informe de la División de Derechos Humanos alerté sobre el vigoroso incremento de la violencia común, que alcanzó el 300% entre enero y septiembre de 1993, insistiendo en señalar que este fenómeno estaba vinculado a la no ejecución, el retardo o la aplicación parcial de los Acuerdos de Paz:

"En primer lugar la recolección de armas de guerra en manos de la población civil. (...) En segundo lugar, las dificultades, insuficiencias y retardos en la disolución de la Policía Nacional y el eficaz despliegue de la Policía Nacional Civil con los recursos adecuados para combatir la delincuencia. Y, en tercer lugar, las limitaciones del proceso de reinserción de los ex combatientes tanto de la Fuerza Armada como del FMLN. A ello debe añadirse la aún ostensible carencia de la investigación del delito que contribuye a una sensación de impunidad." (A/49/59-S/1004/47, párr. 72)

46. De acuerdo con una encuesta realizada entre el 23 y el 30 de mayo de 1994, la mayor parte de los salvadoreños consideran que la delincuencia es el principal problema que afecta al país. Uno de cada cuatro encuestados ha sido víctima de un asalto desde el mes de marzo.

47. Una de las mayores expresiones de la tendencia creciente de la violencia organizada son los casos de secuestros extorsivos y asaltos con consecuencias mortales para las víctimas, a manos de grupos delincuenciales organizados que disponen de armas de guerra.

48. Estas bandas armadas que operan en El Salvador están compuestas generalmente por ex miembros de las fuerzas armadas de El Salvador y de los cuerpos de seguridad y/o antiguos simpatizantes o ex combatientes del FMLN, que disponen, en diversa proporción, de armas de guerra y uniformes de tipo militar. La creciente actividad de estos grupos o bandas armadas en varias zonas del territorio los ha convertido en uno de los factores que mayor violencia e inestabilidad generan en el país.

49. Como producto de la verificación activa se ha podido establecer la existencia de tres clases de bandas armadas: un primer tipo lo constituyen pequeños grupos de individuos que pertenecieron al FMLN, las Fuerzas Armadas de El Salvador y fuerzas de seguridad, que cometen delitos comunes utilizando frecuentemente armas de guerra y ocasionalmente uniformes de tipo militar o policial, sin que evidencien un discurso político en sus acciones.

50. Un segundo tipo de bandas armadas, integradas también por ex miembros de las fuerzas armadas de El Salvador, del FMLN y los cuerpos de seguridad, han logrado ejercer un dominio territorial, especialmente en zonas ex conflictivas. En ocasiones encubren la naturaleza delincencial de sus actividades con un discurso político que alude al rechazo de la aplicación de los Acuerdos de Paz, en especial a la no obtención de los beneficios que consideran les corresponden en su condición de ex combatientes, por lo que critican duramente a los dirigentes de ARENA, el FMLN y las fuerzas armadas de El Salvador, anunciando el reinicio de la guerra.

51. Un tercer tipo de bandas es el de aquellas que responderían a características más complejas y podrían evolucionar para transformarse en organizaciones político-militares. Es el caso de una banda en la zona de Torola, integrada por no más de 40 ex combatientes del FMLN que no reconocen a la dirección nacional del FMLN. Esta banda presenta una organización jerarquizada, sus miembros permanecen concentrados y está equipada con pertrechos, uniformes y armas de guerra. Su discurso es claramente político y su consigna es la continuación de la guerra. Otra de estas bandas opera en San Simón y está compuesta por cerca de 40 hombres. De acuerdo a la información disponible, la mayoría de ellos habría pertenecido a un batallón antiinsurgente adscrito a la Tercera Brigada situada en San Miguel, de donde habrían obtenido las armas. Ciertas fuentes han señalado, incluso, que el jefe de esta banda es un miembro activo en dicha brigada.

52. La verificación activa realizada por la ONUSAL ha mostrado que en ciertas regiones la falta de resultados en la persecución de estas bandas ha sido consecuencia de la indiferencia e ineficacia de la Policía Nacional, así como del retraso del despliegue de la Policía Nacional Civil. Este es el caso de Suchitoto, en el departamento de Cuscatlán, zona ex conflictiva en la que la ausencia o sistemática pasividad de los efectivos de la Policía Nacional ha propiciado que las bandas armadas expandan impunemente sus actividades delictivas de extorsión, secuestros y asesinatos, mientras que de otro lado ha

hecho que la población pierda totalmente la confianza en la policía y desista de denunciar los delitos.

53. La Policía Nacional ha pretendido subsanar la ausencia de patrullajes rutinarios en estas zonas con la ejecución esporádica de grandes operativos de detención masiva o redadas. Durante estos operativos centenares de efectivos recorren los cantones de estas zonas a lo largo de varios días, realizando registros, estableciendo retenes en las carreteras y efectuando detenciones. El balance de algunos de estos operativos ha sido negativo tanto desde la perspectiva de los resultados obtenidos en la persecución de la delincuencia, como desde la del respeto de los derechos humanos.

54. Un ejemplo de este tipo de operativos fue el realizado a finales del mes de febrero en las poblaciones cercanas a Guazapa. Durante tres días 200 policías participaron en una gigantesca redada, que tuvo como resultado final la detención de 21 personas, la mayor parte acusadas de faltas de policía, y el decomiso de un fusil M-16 y una granada. Las bandas armadas resultaron indemnes al no lograrse detener a ninguno de sus integrantes ni decomisar las armas de que disponen. Desde la perspectiva de los derechos humanos, el resultado del operativo fue la detención arbitraria de la mayoría de los capturados, que fueron luego puestos en libertad por los juzgados, y varios casos de malos tratos.

55. Algunas de las observaciones de la ONUSAL sobre las razones por las que estas acciones policiales resultaron ineficaces y hasta contraproducentes, fueron tomadas en cuenta por las autoridades para orientar las acciones de la PNC, organismo que ha registrado algunos éxitos en la persecución de las bandas. El balance de un operativo realizado en la zona de Guazapa por ese cuerpo policial, entre los días 8 y 15 de abril, con presencia de observadores de la ONUSAL, ejemplifica esta situación. Dentro de los aspectos positivos está el haber buscado la cooperación de la población y de los dirigentes del FMLN de la zona, quienes aportaron importante información antes y durante el operativo, que produjo como resultado la captura de varios delincuentes.

56. No obstante, la falta de coordinación con los juzgados de la zona y la carencia de pruebas suficientes en contra de los detenidos ha provocado que de las 56 personas capturadas a lo largo del operativo y puestas a disposición del juez, cerca de 50 hayan sido liberadas por falta de pruebas.

57. La desprotección ciudadana y la pasividad policial, la desconfianza en la actuación de los tribunales de justicia, sumados al hecho que las víctimas arriesgan sus vidas o las de sus familiares secuestrados si denuncian a los delincuentes, han creado un círculo vicioso cuyos efectos son la impunidad de los integrantes de estas bandas y la expansión de sus violentas acciones en contra de la población.

58. Se ha podido verificar que en algunos casos los jueces se ven obligados a ordenar la libertad por falta de pruebas, ya que la policía no logra reunir ni presentar las evidencias suficientes y los testigos se niegan a declarar por temor a las represalias de estas bandas. En otras ocasiones esta situación se da porque la policía realiza la detención o las diligencias prejudiciales en violación de la ley, lo que acarrea la nulidad del proceso judicial.

/...

Adicionalmente la situación de inseguridad ha afectado seriamente la correcta administración de justicia, pues los jueces y funcionarios judiciales también han sido víctimas de amenazas y extorsiones de estas bandas.

C. La verificación activa de otros compromisos establecidos en los acuerdos de paz y que poseen componentes de derechos humanos

1. La administración de justicia

59. Reiteradamente he afirmado que la impunidad es la principal fuente de las violaciones a los derechos humanos en El Salvador. En la misma lógica, la falta de sanción legal para los delincuentes es un factor que contribuye a la multiplicación de la criminalidad. Ese efecto, en El Salvador, tiene su origen en la deficiencia de las instituciones que conforman el sistema de administración de justicia.

60. Con la finalidad de realizar una muestra que indique el estado de funcionamiento del órgano judicial, la División de Derechos Humanos efectuó una actualización de los datos básicos sobre la situación judicial en 75 de los casos más relevantes de violaciones al derecho a la vida conocidos por la ONUSAL, mencionados en los informes sexto al décimo. La muestra reúne, por tanto, los casos sobre los que justificadamente se espera que el órgano judicial ha debido prestar especial atención y demostrado una mayor eficacia (véase el cuadro 1).

Cuadro 1

Situación judicial en 75 casos de violaciones al derecho a la vida

	Ejecuciones arbitrarias	Tentativas de ejecución arbitraria	Amenazas de muerte	Total de casos
Nombre de casos	47	14	14	75
(Porcentaje)				
Distribución de los casos analizados	62,7	18,6	18,6	100
Investigación judicial	100	57	14,3	76
Investigación policial	51	21,5	0	36
Violación al debido proceso legal	47	25	0	49
Identificación de autores	34	7	7	24
Detención de implicados	17	7	0	12
Sentenciados	0	0	0	0

/...

61. El primer aspecto relevante se refiere a los casos sobre los que no existe ningún tipo de investigación por parte del Estado. En efecto, pese a la gravedad de estas violaciones, casi el 25% de casos analizados no han llegado a conocimiento del poder judicial y, en consecuencia, no existe un proceso judicial en el que se investigue el hecho. Generalmente esto ha obedecido a que las víctimas o sus familiares han presentado la denuncia en las oficinas de la ONUSAL, pero han desistido de hacer lo mismo ante el sistema judicial por desconfianza, por considerar ineficaces los procesos judiciales o por temor. Los autores de estas violaciones nunca fueron investigados y quedaron en la total impunidad.

62. Del universo de casos sobre los que existe un proceso judicial (75%), sólo en el 47% existen diligencias prejudiciales de la policía. En otras palabras, en más de la mitad de expedientes judiciales no consta que la policía haya investigado los hechos o que haya brindado algún tipo de colaboración al juez. También se ha constatado que en muchos casos, si bien se ha realizado la investigación policial, ésta ha sido superficial, poco esclarecedora o el resultado fue remitido al juez de forma extemporánea.

63. Otro de los aspectos que merece ser destacado es que a la deficiencia de la investigación policial se suman las faltas atribuibles a los propios jueces, ya que en la mitad de expedientes judiciales se han verificado violaciones al debido proceso.

64. Como consecuencia de las omisiones y deficiencias de la investigación extrajudicial y judicial, la inmensa mayoría de casos de violación permanecen sin esclarecerse, se desconoce a sus autores materiales e intelectuales, los que permanecen en libertad sin haber recibido castigo alguno.

65. Del total de casos estudiados, sólo en el 24% se conoce la identidad de los presuntos responsables y de ellos sólo el 12% se encuentra en prisión preventiva.

66. La actualización practicada sobre estos casos relevantes evidencia que los órganos encargados de investigar estas violaciones y sentenciar a los autores a la pena que establezca la ley, han demostrado un grado de ineficacia extremadamente elevado en cuanto a sus resultados. Desde el mes de julio de 1992 hasta el momento de redactar el presente informe, ninguna persona ha sido sentenciada ni condenada por haber sido hallada responsable de alguno de los 75 casos más graves de violaciones al derecho a la vida denunciados a la ONUSAL.

67. El deficiente desempeño de la administración de justicia que fluye del resultado de este estudio tiene consecuencias que preocupan hondamente. Pese a las reformas operadas en el órgano judicial y los cuerpos policiales, aún persisten serios obstáculos que impiden que éstas se materialicen en una mejor administración de justicia. A la vez, la sensación de impunidad de que disfrutaban los autores de los delitos puede alentarlos a que prosigan con este tipo de acciones sin temor a ser descubiertos y sancionados, además de reforzar en las víctimas la desconfianza en el sistema judicial como instancia protectora, sancionadora y reparadora de sus derechos.

68. Es indispensable acelerar el proceso de reformas del sistema judicial. En ese orden de ideas, la nueva Corte Suprema de Justicia tiene una alta responsabilidad. La depuración interna del órgano judicial, sobre la base de

las evaluaciones efectuadas por el Consejo Nacional de la Judicatura, emerge como una tarea ineludible.

a) El Instituto de Medicina Legal

69. Para el adecuado y eficaz funcionamiento del sistema judicial, existen los órganos auxiliares y colaboradores de administración de justicia, los que, subordinados a los jueces, tienen la obligación de realizar investigaciones y elaborar informes profesionales para una mejor decisión de los magistrados en los procesos judiciales. El Instituto de Medicina Legal, como órgano colaborador de la administración de justicia, debe efectuar diligencias e informes especializados o periciales a solicitud de los jueces.

70. La ley dispone que el juez de lo penal es el superior jerárquico de los médicos forenses y del jefe de la clínica forense. La competencia del Instituto se restringe a la asesoría al órgano judicial, siendo sus miembros peritos judiciales de carácter permanente, que se encuentran legalmente sujetos a las instrucciones y al control del juez, con la obligación de realizar los peritajes de acuerdo a lo específicamente ordenado, debiendo entregar sus conclusiones únicamente al juez competente dentro de un plazo determinado.

71. En ese sentido, para el Instituto existen obligaciones legales específicas en dos órdenes: el acatamiento y la subordinación al órgano judicial y la adecuada capacidad técnica para el desempeño de sus funciones auxiliares de la administración de justicia, requisito indispensable del derecho a ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial. No obstante, la ONUSAL ha constatado que el funcionamiento del Instituto, en muchos casos, se realiza en abierta transgresión de las disposiciones legales.

72. Es el caso de la actuación del Instituto en relación con la muerte del dirigente del FMLN Ernesto Véliz, ocasión en la que el doctor Mateu Llorc, Director del Instituto, decidió unilateralmente emitir un pronunciamiento público divulgando el resultado del examen toxicológico practicado en el cadáver de la víctima, siendo evidente que la causa de la muerte fue las heridas de arma de fuego producidas por los agresores. Con esta acción se afectó seriamente la imparcialidad del sistema de administración de justicia y se violó la norma legal que dispone que la realización de análisis toxicológicos debe efectuarse con la previa y explícita autorización del juez, además de otras disposiciones relativas al respeto a la memoria de los difuntos y al secreto profesional. Una situación similar se presentó en el caso de la muerte del Teniente Coronel Julio Ramón Rivera, oficial norteamericano, ocasionada por la explosión de una granada. En esta ocasión el Juez décimo de lo Penal de San Salvador se vio obligado a ordenar al Director del Instituto, mediante orden judicial del 13 de febrero de 1994, a guardar silencio sobre el resultado de los exámenes.

73. Un caso de particular gravedad fue el asesinato del ex comandante del FMLN Oscar Grimaldi, ocurrido en agosto de 1993. El presunto homicida, Salvador Guzmán, fue encontrado muerto un día después de que se decretara la orden de detención. El Instituto se negó a practicar oportunamente la autopsia de ley ordenada por el juez y en consecuencia no le proporcionó la información respectiva para la investigación judicial. El argumento que entonces dio el Director del Instituto a la ONUSAL fue que la prueba efectuada al cadáver de

Guzmán, sobre el HIV, había resultado positiva. Esta respuesta es insatisfactoria, máxime si se considera que en otros casos de similar naturaleza el Instituto había procedido a realizar la autopsia.

74. La persistencia de muchos de los problemas de insuficiente capacidad científica del Instituto pueden tener su origen en la ausencia de control por parte de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, instancia que tiene la atribución legal de vigilar el ejercicio de la profesión médica. A la vez, sería aconsejable que la Corte Suprema de Justicia, entidad encargada de nombrar el director y los médicos forenses del Instituto, ejerza un control estricto de sus funciones, al igual que los jueces de primera instancia, quienes tienen autoridad sobre el Instituto.

b) El proceso de reformas

75. El 30 de junio de 1994 finalizó el mandato de los miembros de la Corte Suprema de Justicia por lo que la Asamblea Legislativa deberá escoger los nuevos magistrados, conforme a las disposiciones de la Constitución reformada.

76. Con la renovación de la Corte Suprema de Justicia se pone en marcha un nuevo procedimiento en el que las ternas de candidatos son propuestas por la Federación de Asociaciones de Abogados y el Consejo Nacional de la Judicatura. En el primer caso, observadores de la División de Derechos Humanos verificaron la elección de los candidatos, realizada el 12 marzo de 1994 en las 14 cabeceras departamentales del país. Un segundo elemento novedoso del procedimiento es que la designación de los miembros de la Corte requiere el voto de los dos tercios de los diputados, lo que deberá impulsar el consenso de los partidos representados en la Asamblea Legislativa.

77. La División de Derechos Humanos y la Comisión de la Verdad presentaron una serie de recomendaciones destinadas a introducir mejoras al sistema de administración de justicia, cuya efectiva aplicación se espera sea materia de análisis por la nueva Corte Suprema.

78. El 29 de abril de 1994 fueron aprobadas ciertas reformas constitucionales que requieren la ratificación de la Asamblea instalada el 1 de mayo para entrar en vigor. Dichas reformas recogen algunas de las recomendaciones propuestas, pero dejan de dar cumplimiento a otras de especial importancia, por lo que resulta oportuno actualizar la evaluación realizada en el octavo y décimo informes sobre el cumplimiento de estas recomendaciones, varias de las cuales apuntan en dirección a la superación de la impunidad.

i) Desconcentración de funciones de la Corte Suprema de Justicia

79. La recomendación dirigida a transferir la facultad de nombrar y remover de su cargo a los jueces de paz, los jueces de primera instancia y los magistrados de segunda instancia, de la Corte Suprema de Justicia al Consejo Nacional de la Judicatura no fue incorporada en la reforma constitucional.

80. Por otro lado, se recomendó adjudicar a un ente independiente la competencia de autorizar y suspender las actividades profesionales de los abogados y notarios, concentrada en poder de la Corte Suprema. La reforma constitucional en vías de

ratificación cumple parcialmente esta recomendación, pues suprime la facultad de la Corte Suprema para suspender a los abogados y notarios, la cual en adelante será de la competencia del recién creado Consejo Nacional de la Abogacía y Notariado. La Corte retiene, no obstante, la facultad de autorizar el ejercicio profesional de los abogados y notarios.

ii) Hábeas corpus y amparo

81. Con el fin de ofrecer a los ciudadanos un mayor acceso a los mecanismos constitucionales de protección, se recomendó otorgar a los jueces de primera instancia la competencia para conocer y resolver sobre el hábeas corpus y el amparo.

82. La referida reforma constitucional amplió el ámbito de aplicación del hábeas corpus a los derechos a la dignidad e integridad física, psíquica y moral de las personas detenidas, distribuyendo la competencia de la forma siguiente: la Corte Suprema de Justicia conocerá del hábeas corpus en los casos de antejuicio contra altos funcionarios del Estado y, en revisión, los casos de denegación de libertad en los hábeas corpus presentados ante tribunales inferiores; las Cámaras de Segunda Instancia con competencia penal conocerán los hábeas corpus en los casos de detenciones judiciales y los juzgados de primera instancia los hábeas corpus en los casos de detenciones administrativas o captura por particulares. Esta formulación es satisfactoria.

83. En cuanto al amparo, la recomendación no fue atendida, por lo que la competencia queda en manos de la Corte Suprema, distribuida entre sus cuatro salas en razón de la materia, una vez sean ratificadas las reformas constitucionales.

iii) Confesión extrajudicial

84. La reforma constitucional acordada recoge también la recomendación formulada en cuanto a la supresión de la confesión extrajudicial, ya que se suprime su valor jurídico y se limita únicamente a la validez de la confesión ante autoridad judicial.

85. En mayo de 1994 el Ministerio de Justicia presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de los nuevos códigos penal y procesal penal. El proyecto del código procesal penal deroga la validez de la confesión extrajudicial.

iv) Detención administrativa

86. La recomendación para la disminución del término de la detención administrativa que actualmente es de 72 horas como máximo aún no ha sido considerada en las reformas constitucionales y legislativas.

v) Consejo Nacional de la Judicatura

87. Existen dos recomendaciones sobre la materia. La primera, que propone que la destitución de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura proceda con el voto favorable de las dos terceras partes de la Asamblea Legislativa, ha sido cumplida con una reforma a su propia ley y también ha sido introducida en las reformas constitucionales acordadas recientemente. La segunda, dirigida al



perfeccionamiento del Consejo en cuanto a su composición y atribuciones, así como a la independencia de la Escuela de Capacitación Judicial, no ha sido considerada.

vi) Ratificación o adhesión a instrumentos internacionales

88. Se ha recomendado la ratificación o adhesión de diversos instrumentos internacionales entre los que se cuentan la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador); el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. También se ha recomendado la aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

89. Hasta ahora la Asamblea Legislativa sólo se ha ocupado y pronunciado favorablemente sobre la Convención contra la Tortura, pero con reserva sobre la competencia del Comité contra la Tortura para recibir, investigar y pronunciarse en caso de recibir denuncias acerca de violaciones sistemáticas, así como sobre la competencia de la Corte Internacional de Justicia para conocer las controversias que puedan surgir en relación a la interpretación o aplicación de la Convención.

vii) Fondo de indemnización a la víctimas de violaciones a los derechos humanos

90. El único avance observado frente a esta recomendación ha sido el reconocimiento constitucional del derecho a una indemnización en los casos de retardación de justicia, pero dicha reforma espera la ratificación respectiva por la Asamblea Legislativa. La Comisión de Derechos Humanos de El Salvador ha presentado una iniciativa de ley ante la Asamblea Legislativa para crear el fondo.

viii) Código de conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

91. Se ha recomendado la adopción de una ley para regular la conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en términos de asegurar el respeto a los derechos humanos. Algunas de las disposiciones contenidas en el Código de conducta de las Naciones Unidas han sido consideradas en el nuevo proyecto del código procesal penal presentado en mayo de 1994.

ix) Detenciones arbitrarias por faltas de policía

92. Con la finalidad de revertir las prácticas de detenciones arbitrarias por faltas de policía, se recomendó la derogación de la antigua Ley de Policía de 1886; el traslado de la competencia relativa a estas faltas a las autoridades judiciales; así como la regulación expresa de las funciones y facultades de la Policía Municipal. Estas recomendaciones no han sido cumplidas.

93. Las reformas constitucionales acordadas en abril pasado consideran la reducción del plazo de 15 a cinco días de arresto por faltas administrativas.

x) Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

94. La reforma constitucional acordada recientemente distribuye un porcentaje no inferior al 2% del presupuesto general de la nación para ser distribuido entre las tres instituciones que conforman actualmente el Ministerio Público, incluida la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, lo cual significa un avance en lo que significa dotar a la Procuraduría de más recursos económicos.

xi) Legislación penal y penitenciaria

95. Dentro del proceso de actualización normativa, especialmente para su adecuación al respeto y garantía de los derechos humanos, se ha recomendado la aprobación de un nuevo código penal, código procesal penal y ley penitenciaria. Han existido avances en torno a proyectos sobre la materia, y diversas consultas a distintas instituciones públicas y privadas del país, pero ninguno de los textos legales ha sido objeto de dictamen por las comisiones respectivas de la Asamblea Legislativa ni se ha fijado una esquema claro para su aprobación.

xii) Órgano judicial

96. Con el fin de garantizar la correcta actuación del órgano judicial se ha recomendado una nueva ley de la carrera judicial, la cual aún no ha sido aprobada.

c) El régimen penitenciario

97. En el décimo informe, al hacer referencia a los graves motines ocurridos en los centros penales de San Francisco Gotera, Santa Ana y Sensuntepeque, se alertó que estos graves hechos, así como la situación de tensión que se presenta en éstos y otros centros penales del país, ponen en evidencia la crítica situación de los centros penales en El Salvador, a la vez que demandan del Estado la adopción de medidas tendientes a solucionar estructuralmente la situación penitenciaria (A/49/116-S/1994/385, párr. 105).

98. La ausencia de medidas dirigidas a modificar esta situación propicia que este tipo de reacciones violentas de los reclusos tienda a repetirse. El 21 de mayo se produjo un nuevo motín, esta vez en el centro penal de Mariona, que tuvo como saldo trágico la muerte de un recluso. Los amotinados, que exigían mejores condiciones de reclusión, suspendieron la medida tras un proceso de negociación. No obstante cinco días después, el 26 de mayo, la violencia estalló nuevamente en dicho penal, lográndose una "tregua" gracias a la participación de observadores de la ONUSAL. El conflicto fue solucionado con la firma de un acta que recogía los acuerdos de la negociación realizada con el Ministro de Justicia y el Director de la División de Derechos Humanos.

99. La grave situación penitenciaria ha motivado que se coloque especial énfasis en la tarea de verificación activa. Para tal fin se ha concertado con el Director de Centros Penales los alcances del trabajo de la División en materia penitenciaria, así como las facilidades que se otorgarán a los observadores de la ONUSAL para el ingreso a los penales, en donde realizarán una "encuesta mínima" que permita una visión global de la situación carcelaria.

/...

d) La cooperación técnica de la División al sistema judicial

100. La División de Derechos Humanos de la ONUSAL ha concertado con el Consejo Nacional de la Judicatura un plan de 11 cursos-taller de especialización que se realizarán desde el mes de agosto hasta fines de septiembre del presente año. En los seminarios, dirigidos a magistrados de la Corte y magistrados de las cámaras, jueces penales de primera instancia (120) y jueces de paz de la República (350), se analizarán estrategias para la mejor aplicación de las normas del derecho internacional de los derechos humanos en El Salvador. A estos cursos también asistirán fiscales de cámaras y fiscales de primera instancia, así como representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

101. En los eventos se utilizará como documento básico una publicación sobre la protección de los derechos humanos y la administración de justicia elaborado por expertos nacionales e internacionales con el auspicio de la ONUSAL, el mismo que se encuentra en etapa de impresión, así como un libro de lecturas de derechos humanos preparado por profesionales salvadoreños.

102. Tanto el Consejo Nacional de la Judicatura como el Fiscal General han aceptado practicar con los jueces y fiscales una "evaluación diferida". Ésta consistirá en que cada funcionario presente con cierto tiempo de posterioridad a los seminarios la que consideren su mejor resolución y sentencia en relación con el respeto de los derechos humanos, así como la solución dada a un caso hipotético. La selección resultante podrá ser de suma utilidad en las actividades de seguimiento de estos cursos-taller.

2. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

103. En varias oportunidades he señalado la importancia que tiene para El Salvador el hecho de fortalecer la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, cuyo funcionamiento adecuado es esencial para el control de la legalidad, para la protección eficaz y para la promoción de los derechos humanos en el país. Con esa convicción, se ha llamado la atención del Gobierno de El Salvador y de la comunidad internacional acerca de la necesidad de dotar a la Procuraduría de los medios adecuados para el cumplimiento cabal de su mandato constitucional y legal. En ese mismo sentido la División de Derechos Humanos ha ofrecido reiteradamente su apoyo técnico a la Procuraduría en diversas áreas, en especial en aquellas que se imbrican en el mandato de las dos instituciones.

104. A escasos dos años de labores de la Procuraduría se han obtenido avances, en especial en cuanto a su despliegue territorial, que le ha permitido atender un cada vez mayor número de población. Durante el período cubierto por este informe el Procurador inauguró tres delegaciones, que cubren los departamentos de Chalatenango, La Paz y La Libertad.

105. El previsible retiro de la ONUSAL obliga a la Procuraduría a efectuar mayores esfuerzos para su consolidación, así como a estimar los beneficios de asumir en mayor grado la experiencia acumulada por la ONUSAL durante tres años de verificación activa de los derechos humanos en El Salvador, tarea que tendrá que asumir plenamente al momento que la Misión finalice sus actividades. En esa

/...

perspectiva la División de Derechos Humanos continúa y continuará su asistencia a la Procuraduría. Con ese ánimo se ha concertado la realización de una serie de actividades de cooperación técnica entre la ONUSAL y la Procuraduría, que cubren, entre otros aspectos, los relacionados con la recepción y calificación jurídica de denuncias, las técnicas de investigación policial y judicial de las denuncias y la sustentación jurídica de resoluciones.

106. Por requerimientos de la transferencia de conocimientos y en función del traspaso de la experiencia acumulada por la ONUSAL en el terreno, así como por la importancia de que la población sepa con claridad que finalizada la verificación internacional de los derechos humanos el país cuenta con una instancia nacional de protección que posee amplias competencias para conocer de sus denuncias, se prevé que la realización de las actividades de asistencia técnica se efectúe bajo una modalidad operativa en la que, respetando la independencia y el mandato de ambas instituciones, pueda desarrollarse la verificación conjunta de violaciones a los derechos humanos.

107. La División de Derechos Humanos mantendrá informado al Secretario General de los resultados obtenidos en este marco de cooperación con la Procuraduría, cuya consolidación es sin duda sustantiva para la vigencia de los derechos humanos en El Salvador.

### 3. La Fuerza Armada

108. La División de Derechos Humanos, en coordinación con la Fuerza Armada, ha proseguido la aplicación del programa de cooperación destinado a fomentar el conocimiento y observancia de la nueva doctrina y el rol de la Fuerza Armada en un sistema democrático, con especial énfasis en la formación militar respetuosa del estado de derecho y los derechos humanos.

109. Se han producido importantes avances en el proceso de concertación, entre el Ministerio de Defensa y la División de Derechos Humanos, logrando definir el contenido de la publicación de materiales didácticos que se encuentran en su fase de impresión.

110. Dentro del marco de cooperación con el desarrollo de la nueva doctrina militar, se han desarrollado cursos de sociología militar y de derechos humanos en la Escuela Militar General Gerardo Barrios, dirigidos a cadetes de dicha institución. Durante el período también se efectuaron cursos de derechos humanos en la Escuela de Infantería, dirigidos a los tenientes alumnos del curso avanzado de infantería, previo a su ascenso al grado de capitán. También se han recorrido todas las brigadas del ejército impartiendo conferencias a los jefes y oficiales de cada una de ellas sobre los principios de la sociología militar y la moral militar democrática.

111. Si bien los avances en la reforma y restructuración de la Fuerza Armada como institución de exclusiva competencia para la defensa nacional están fuera de cuestión, es preocupante que haya indicios acerca de la participación de miembros de alta de la Fuerza Armada en acciones delictivas. Aun cuando ello no compromete a la institución ni a su alto Mando, es imprescindible impulsar la investigación y poner ante la justicia ordinaria a los elementos implicados.

#### 4. La Policía Nacional Civil

112. En su último informe al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la ONUSAL, el Secretario General afirmó que realzar el carácter civil de la Policía Nacional Civil y aumentar su eficacia es un aspecto de la situación salvadoreña que requiere atención con especial urgencia (S/1994/561, párr. 102). El Secretario General hizo igual hincapié en la desmovilización acelerada de la Policía Nacional (ibíd.).

113. En el décimo informe de esta División al Secretario General, en referencia a la difícil coyuntura en materia de seguridad pública, señalé que la persecución de la delincuencia requiere del mayor esfuerzo del Estado en el sentido de adoptar medidas integrales, profundas y planificadas tendientes a fortalecer a la Policía Nacional Civil para que cumpla cabalmente con la tarea que la nación en su conjunto le encomendó en los acuerdos de paz: velar por la seguridad pública definida en el marco de los valores democráticos y de su relación esencial con la protección y defensa de los derechos humanos y con el estado de derecho (A/49/116-S/1994/385, párr. 127). En esta ocasión debo reafirmar estas consideraciones, ante la profundización de la situación de violencia delincencial en el país.

114. Algunos sectores han responsabilizado de la situación de inseguridad al vacío de autoridad generado por la disolución de los antiguos cuerpos de seguridad. Esta situación fue advertida por las partes al momento de negociar los acuerdos de paz y por ello se previó la permanencia durante un tiempo de la Policía Nacional y su progresivo reemplazo por la PNC. En este sentido el retraso en el despliegue de la PNC dentro de los plazos previstos en los acuerdos de paz puede haber colaborado al crecimiento de este fenómeno delincencial. Recientes circunstancias han puesto de manifiesto la paralela conveniencia de acelerar la desmovilización de la Policía Nacional.

115. En efecto, en la mañana del 22 de junio, un camión blindado que transportaba dinero fue asaltado frente a las oficinas del Banco de Comercio, ubicado en pleno centro de San Salvador, por lo menos 15 individuos armados, algunos de ellos vistiendo uniformes de la Policía Nacional. Después de asesinar a tres miembros de la seguridad, los asaltantes robaron un monto de aproximadamente 2 millones y medio de colones (aproximadamente 290.000 dólares). Fue detenido el teniente José Rafael Coreas Orellana, quien fungía como Jefe de la Sección de Investigaciones de la Policía Nacional y que fue calificado por el Viceministro de Seguridad Pública, Hugo Barrera, como "un importante partícipe en el asalto".

116. El asalto puso de relieve el río subterráneo de delincuencia dentro de la misma Policía Nacional que la sociedad venía sospechando y demostró que la Policía Nacional visiblemente no es el cuerpo mas idóneo para brindar seguridad y confianza a la ciudadanía. Además, por primera vez, el Presidente habló del "crimen organizado" y de la necesidad de erradicarlo de El Salvador.

117. Durante el período la ONUSAL recibió 147 denuncias de violaciones a los derechos humanos cuya presunta responsabilidad recae en agentes de la PNC. De ese número, un total de 58 denuncias, después de su verificación, arrojó resultados positivos. Las denuncias se distribuyen en la forma en que aparece en el cuadro 2.

Cuadro 2

Registro de denuncias admitidas por la ONUSAL contra  
la Policía Nacional Civil

(1° de noviembre de 1993 al 31 de junio de 1994)

Denuncias admitidas	PNC	Verifi- cación positiva	Por derecho	Porcen- taje
<u>Violaciones del derecho a la vida</u>			1	
Ejecución arbitraria	3	1		1,7
Tentativa de ejecución arbitraria	0	0		0,0
Amenazas de muerte	3	0		0,0
<u>Violaciones del derecho a la integridad personal</u>			19	
Tortura <sup>a</sup>	5	4		6,9
Malos tratos	25	10		17,2
Uso excesivo de la fuerza	16	5		8,6
<u>Violaciones del derecho a la seguridad personal</u>			3	
Desaparición forzada	0	0		0,0
Secuestro	0	0		0,0
Otras amenazas	6	3		5,2
<u>Violaciones del debido proceso legal</u>				
<u>Garantías procesales</u>			3	
Derecho a ser juzgado por juez en plazo razonable	1	0		0,0
Derecho a la defensa	0	0		0,0
Derecho a no ser coaccionado	3	3		5,2
Derecho a la instancia plural	0	0		0,0
<u>Derecho a la justicia</u>			5	
Deber jurídico del Estado de investigar y sancionar	23	5		8,6
Derecho a la indemnización	0	0		0,0
<u>Violaciones del derecho a la libertad personal</u>			27	
Detención arbitraria	38	15		25,9
Detención arbitraria por falta de policía	7	5		8,6
Garantías procesales	17	7		12,1
Total	147	58	58	100,0

<sup>a</sup> De estos cuatro casos, se verificó tortura en dos, uso excesivo en uno y coacción policial en el último.

118. El mayor número de violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de la PNC tienen su origen en el desconocimiento o la falta de aplicación de las normas jurídicas que rigen su actividad. En efecto, entre detenciones arbitrarias, incumplimiento de otras garantías procesales y omisiones al deber jurídico de investigar y sancionar, suman el 62% de las denuncias verificadas positivamente contra ese cuerpo policial. Sin embargo, el porcentaje entre malos tratos, uso excesivo de la fuerza y torturas equivale al 30% del total. De especial preocupación son dos casos verificados donde agentes de la PNC parecieran estar involucrados en la práctica de torturas para hacer confesar a un detenido.

119. En reiteradas ocasiones he dicho que entre las causas que pueden concurrir a la explicación de las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de la PNC puede estar la incorporación de la Unidad Ejecutiva Antinarcotráfico (UEA) y la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos (CIHD) a la PNC, sin modificación o depuración alguna y sin haber seguido los cursos ordinarios en la Academia Nacional de Seguridad Pública.

120. La PNC ha adoptado algunas medidas correctivas para controlar hechos violatorios a los derechos humanos. El inicio de las operaciones, durante este período, de las Unidades de Control y de Investigación Disciplinaria, el nombramiento de sus respectivos jefes, y la aprobación del nuevo Reglamento Disciplinario son acciones orientadas en esa perspectiva aunque aún limitados en su contenido.

121. Durante el período la División de Derechos Humanos realizó una extensa labor en conjunto con la Dirección de la PNC en aras de promover e impulsar la consolidación de la institución policial dentro del marco de los Acuerdos de Paz. A partir del mes de febrero, representantes del Director de la División se reunieron casi semanalmente con el Director de la PNC y sus asesores para intercambiar puntos de vista acerca de los problemas detectados. Desde el 4 de marzo comenzaron a asistir a estas sesiones de trabajo los jefes respectivos de las Unidades de Control y de Investigación Disciplinaria, que hasta ese momento no habían sido nombrados.

122. Las reuniones periódicas entre la División y la PNC sirvieron como foro para el planteamiento y discusión de una variedad de temas importantes, entre ellos la elaboración de líneas concretas de cooperación entre la PNC y la División, la verificación en el terreno de denuncias registradas en su contra, la trasmisión de casos relevantes verificados contra sus agentes, el diseño de un proyecto de cursos-taller para mandos y la preparación y publicación de la Guía de Normas y Procedimientos de la Policía Nacional Civil. Estas sesiones de trabajo han permitido un intercambio constante y fluido acerca de las denuncias de violaciones atribuidas a efectivos de la PNC que más relevancia cobraron durante este período. Esta positiva voluntad de la institución policial para tratar a nivel de dirección los casos más relevantes contribuye muy positivamente a la solución de irregularidades detectadas en el proceso de verificación activa, que se constituye, de esa manera, en una herramienta para el apoyo institucional.

123. Varias de las iniciativas tratadas en estas reuniones periódicas han dado frutos positivos. Entre ellas merece la pena resaltar la Guía sobre Normas y

Procedimientos de la Policía Nacional Civil. Esta guía incorpora todas las leyes, reglamentos y normas esenciales para la adecuación de la actividad policial a la legalidad vigente y al respeto de los derechos humanos. Además de haber sido distribuida a todos los mandos de la PNC, la guía se utilizó como texto básico en los cursos-taller de especialización para los mandos y abogados de la PNC, los cuales se realizaron en todo el territorio nacional durante el mes de junio.

124. Los cursos-taller de capacitación en técnica policial y derechos humanos fueron impartidos a inspectores, subinspectores, sargentos, cabos e incluso algunos agentes de la PNC, a lo largo de seis jornadas de tres días realizadas durante el mes de junio en San Salvador, San Miguel, San Vicente y Santa Ana. Una prueba de evaluación fue aplicada a los participantes en los cursos-taller por la Unidad Jurídica de la PNC con apoyo de la División. Dicha evaluación mostró que aun después de la realización de estas jornadas subsisten ciertas deficiencias en el conocimiento de reglas importantes, como la nulidad de las diligencias cuando no se ha designado abogado defensor al infractor y la designación del juez competente. En cambio, hay buen conocimiento sobre las reglas para el allanamiento de una morada (mandato judicial, flagrante delito, etc.) y la investigación de oficio. Resaltó también que los mandos, y sobre todo los sargentos y cabos, destacados al interior del país tienen un nivel de preparación inferior respecto al Gran San Salvador, donde tanto los mandos como los sargentos y cabos recibieron calificaciones de "bien" o de "sobresaliente". La División de Derechos Humanos y el mando de la PNC celebraron una reunión para evaluar los cursos y las pruebas y acordaron dar continuidad a la tarea de capacitación.

125. Por instrucciones del Director General de la PNC, la guía ha sido utilizada por la PNC como herramienta cotidiana de trabajo de todos sus efectivos. En coordinación con la Dirección de la PNC, la ONUSAL aplicará periódicamente unos formularios para verificar la situación y conducta de los efectivos de la PNC en las diferentes delegaciones, subdelegaciones y puestos.

126. El seguimiento de las actividades de la PNC y la cooperación institucional para afianzar su formación y desenvolvimiento dentro de la nueva doctrina policial, respetuosa de los derechos humanos y del estado de derecho, ha asumido especial importancia en la actual coyuntura. Una fuerza policial eficaz es hoy más urgente que nunca. Para serlo requiere contar con la confianza y apoyo de la ciudadanía lo cual se consigue en tanto y en cuanto la fuerza sea percibida en su conducta cotidiana como un ente de servicio y no como un aparato represor y abusivo. Ello no obsta, por cierto, que la energía en el accionar policial sea puesta de lado ni que se adopte una actitud complaciente ante el crimen. En ese orden de ideas, el respeto a la ley y la eficacia en la acción policial son el anverso y reverso de una misma moneda. A no dudarlo, se está hoy construyendo en El Salvador una nueva policía que se proyecta a ser modelo para el continente si se continúa corrigiendo las deficiencias y problemas que se han ido detectando.



### III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

127. Si bien las tendencias globales del proceso se han mantenido, la profundización de la situación de violencia común en el país y el visible involucramiento de miembros de los cuerpos de seguridad en actos de delincuencia, sumados a la impunidad derivada del deficiente funcionamiento del sistema de administración de justicia, constituyen obstáculos importantes para la realización efectiva de los derechos humanos en El Salvador.

128. Frente a la difícil situación de inseguridad ciudadana el gobierno ha venido emprendiendo medidas oportunas. El Presidente de la República ha apoyado firmemente a la Policía Nacional Civil como único órgano encargado legalmente de velar por la tranquilidad ciudadana y el orden público interno. Se ha efectuado nuevos despliegues de la PNC. Fueron nombrados como Viceministro de Seguridad Pública y como Director de la Policía Nacional Civil personas comprometidas en lograr mayor eficiencia en la PNC. Se anunció que se adelantará la desmovilización de la Policía Nacional, se disolvió, en fecha anticipada, la Sección de Investigación Criminal de la Policía Nacional. La División es de la opinión que sería conveniente acelerar mas aún la desmovilización de la Policía Nacional, coincidiendo, de esta forma, con lo expresado por el Presidente de la República.

129. Aunque la cantidad de denuncias recibidas disminuyó en comparación con períodos pasados, un importante número de ellas presentan indicios o elementos de juicio que no permiten descartar la motivación política y parecen indicar que aún existen grupos que recurren a la violencia como medio para resolver conflictos políticos. Esto perjudica al proceso de paz y entorpece los esfuerzos del gobierno de consolidar el estado de derecho.

130. Pese a los notables avances producidos en la Fuerza Armada en el desarrollo de la nueva doctrina militar, al haber indicios de participación de miembros de alta en hechos delictivos, es imprescindible impulsar la investigación y poner ante la justicia ordinaria a los elementos implicados.

131. La situación de derechos humanos en El Salvador será siempre precaria hasta que las instituciones del Estado cuenten con la eficacia para prevenir y sancionar las violaciones a los derechos humanos. En efecto, la impunidad sigue siendo la principal fuente de las violaciones a los derechos humanos en El Salvador. En este orden de ideas, sería indispensable acelerar el proceso de reformas del sistema judicial. La nueva Corte Suprema de Justicia tiene los elementos para proceder a una depuración interna del órgano judicial, sobre la base de las evaluaciones efectuadas por el Consejo Nacional de la Judicatura.

132. El previsible retiro de la ONUSAL pone en evidencia la importancia de las instituciones permanentes del país tales como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en la protección y la promoción de los mismos. Es de esperar que la Procuraduría esté en condiciones de asumir plenamente la tarea de verificación activa al momento que la ONUSAL finalice sus actividades.

133. Las organizaciones no gubernamentales han ido adaptando su trabajo a la nueva realidad del país y contribuyendo a la construcción de un estado

democrático, pero sin la presencia de las violaciones masivas del pasado, encuentran dificultades en conseguir el financiamiento necesario para su labor. Se hace un llamamiento a la comunidad internacional para ayudar a las organizaciones no gubernamentales a jugar su rol que, en cierto modo, es más importante que nunca.

134. El sistema penitenciario atraviesa una grave crisis. Es necesario modernizar a la mayor brevedad el régimen penitenciario y destinar mayores recursos hacia el sector. En ese orden de ideas, es importante avanzar en la aprobación de la ley penitenciaria ya presentada a la Asamblea Legislativa.

135. Algunas de las recomendaciones de la División de Derechos Humanos y la Comisión de la Verdad destinadas a introducir mejoras al sistema de administración de justicia se encuentran en vía de cumplimiento, como el acceso al recurso del hábeas corpus y la supresión del valor jurídico de la confesión extrajudicial. Es importante que la nueva Asamblea Legislativa ratifique las reformas constitucionales en proceso de aprobación y las reformas a la legislación secundaria que se encuentran pendientes.

136. Otras recomendaciones han quedado incumplidas en el proceso de reforma constitucional. Destaca, en este sentido, la de otorgar al Consejo Nacional de la Judicatura la facultad de nombrar y remover a los jueces, la ampliación del amparo, la disminución del término de la detención administrativa y la derogación de la Ley de Policía. Es conveniente que la Asamblea Legislativa aborde oportunamente estos temas.

137. En lo que respecta a las normas internacionales sobre derechos humanos, la Asamblea Legislativa sólo ratificó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, pero con importantes reservas sobre la competencia del Comité contra la Tortura para recibir denuncias acerca de violaciones sistemáticas. Tampoco se ha reconocido la competencia obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos siendo el único país centroamericano en tal situación. De los instrumentos pendientes, sería de particular importancia la ratificación del protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Cuadro 3  
Análisis de coyuntura, marzo a junio de 1994

Denuncias admitidas por la ONUSAL

Denuncias admitidas	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
<u>Violaciones del derecho a la vida</u>					
Ejecución arbitraria	9	8	5	6	28
Tentativa de ejecución arbitraria	3	4	2	0	9
Amenazas de muerte	18	19	14	8	59
<u>Violaciones del derecho a la integridad personal</u>					
Tortura	0	0	2	1	3
Malos tratos	4	6	17	9	36
Uso excesivo de la fuerza	4	3	6	1	14
<u>Violaciones del derecho a la seguridad personal</u>					
Desaparición forzada	1	0	0	0	1
Secuestro	9	4	0	2	15
Otras amenazas	20	16	5	3	44
<u>Violaciones del debido proceso legal</u>					
<u>Garantías procesales</u>					
Derecho a ser juzgado por juez en plazo razonable	2	0	0	1	3
Derecho a la defensa	0	2	0	1	3
Derecho a no ser coaccionado	2	0	1	1	4
Derecho a la instancia plural	0	0	0	0	0
<u>Derecho a la justicia</u>					
Deber jurídico del Estado de investigar y sancionar	16	12	10	11	49
Derecho a la indemnización	0	0	0	1	1
<u>Violaciones del derecho a la libertad personal</u>					
Detención arbitraria	7	11	14	7	39
Detención arbitraria por falta de policía	2	0	2	2	6
Garantías procesales	1	5	2	5	13
<u>Violaciones del derecho a la libertad de expresión</u>	1	0	0	0	1
<u>Violaciones del derecho a la libertad de asociación</u>					
Derecho a asociarse libremente	1	0	0	1	2
Libertad de reunión	0	0	0	0	0
Libertad sindical	0	0	1	0	1
<u>Violaciones del derecho a la documentación personal</u>					
A obtener documentos de identidad personal	0	0	1	0	1
A obtener documentos de estado civil	0	0	0	0	0
No corresponde a calificación	0	0	0	1	1
Total	100	90	82	61	333

Cuadro 4

Denuncias admitidas por categoría de derecho vulnerado,  
marzo a junio de 1994

(Porcentaje)

Violación	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
Vida	30	34,44	25,6	23	28,26
Integridad personal	8	10	30,5	18	16,625
Seguridad	30	22,22	6,1	8,2	16,63
Debido proceso legal	20	15,56	13,4	24,6	18,39
Libertad de expresión	10	17,78	22	23	18,195
Libertad personal	1	0	0	0	0,25
Libertad de Asociación	1	0	1,2	1,6	0,95
Documentación personal	0	0	1,2	1,6	0,7
Total	100	100	100	100	100

Cuadro 5

Presuntos responsables denunciados, marzo a junio de 1994

Presuntos responsables	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total	Porcen- taje
Miembros policía nacional	13	12	14	13	52	15,6
Grupos irregulares	11	15	2	2	30	9,0
No identificados	18	18	9	9	54	16,2
Miembros policía municipal	0	1	2	3	6	1,8
Miembros PNC	17	23	32	11	83	24,9
Miembros fuerzas armadas	2	3	2	6	13	3,9
Ministerio público	1	0	0	1	2	0,6
Órgano ejecutivo	0	0	0	0	0	0,0
Órgano Judicial	17	12	7	10	46	13,8
Miembros de la Unidad Ejecutiva Antinarcotráfico	1	0	0	0	1	0,3
Miembros de la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos	1	0	0	1	2	0,6
FMLN	4	0	0	0	4	1,2
Otros	15	6	14	5	40	12,0
Total	100	90	82	61	333	100,0